

First Submitted: 1 December 2023 Accepted: 31 December 2023

DOI: <https://doi.org/10.33182/y.v4i2.3211>

El ciclo progresivo: un giro a la izquierda en la política latinoamericana

Henry Veltmeyer¹

Resumen

Este artículo explora la dinámica política asociada con lo que se ha descrito como una ‘marea color de rosa’ de cambios de régimen en América del Sur y un ‘ciclo progresista’ en la política latinoamericana: regímenes preocupados por profundizar el neoliberalismo en la búsqueda de un desarrollo más inclusivo. Este ciclo progresista, que no coincidió por casualidad con el auge de las materias primas en los mercados capitalistas, se desarrolló en América del Sur: en Venezuela, Brasil y países cercanos a los Andes (Argentina, Bolivia, Ecuador). El ensayo también destaca las limitaciones del nuevo desarrollismo, que consiste en el modelo económico neoextractivista utilizado por los gobiernos del Marea Rosada para avanzar en su agenda política. Este modelo atrapa a la economía política en las contradicciones del sistema capitalista.

Palabras clave: Marea rosada; ciclo progresista; neoliberalismo; nuevo desarrollismo; neoextractivismo

The Progressive Cycle: a Turn to the Left in Latin American Politics

Abstract

This article explores the political dynamics associated with what has been described as a ‘pink tide’ of regime change and an associated ‘progressive cycle’ in Latin American politics. This refers to regimes that are concerned to move beyond neoliberalism in the search for a more inclusive form of development. This progressive cycle, which not coincidentally coincided with ‘a commodities boom in capitalist markets, unfolded in South America (Venezuela, Brazil and the Andes countries of Argentina, Bolivia, Ecuador) from 2002 to 2012. The article also highlights the limitations of neodevelopmentalism, which relates to the neoextractivist model used by the progressive governments to advance their political agenda. This model entraps the political economy of these countries in the inescapable contradictions of the capitalist system.

Keywords: Pink Tide; Progressive Cycle; Neoliberalism; Neodevelopmentalism; Neoextractivism

Introducción

A comienzos del nuevo milenio, varias fuerzas de cambio como el ascenso de China como potencia económica mundial, el auge de los productos primarios y el declive del neoliberalismo como doctrina y modelo económico, crearon un contexto completamente nuevo para el proceso de desarrollo capitalista en América Latina. Las características de este nuevo contexto incluyeron la rápida expansión del capital extractivo y una ‘marea rosada’ en la política, que condujo a la formación de regímenes de izquierda (‘progresistas’) orientados hacia el *nuevo desarrollismo* (activismo inclusionario del estado) y el *extractivismo* (extracción de recursos naturales y su exportación en forma primaria) como estrategia de desarrollo nacional

¹ Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Correo electrónico: hveltmeier@gmail.com



(Veltmeyer, 2012, 2023). No es que el resultado de estas tendencias y los acontecimientos asociados, como un pronunciado auge de las materias primas, fueran uniformes. De hecho, es posible trazar tres patrones diferentes en los acontecimientos políticos posteriores.

Una (la de una continuidad) fue la formación de regímenes alineados con Estados Unidos y que continuaron siguiendo la línea neoliberal en sus políticas económicas. Entre ellos se encontraban Chile, que era nominalmente socialista pero cuyas políticas no se diferenciaban de los regímenes neoliberales tradicionales, excepto por menos dogmatismo y más pragmatismo; Perú, donde el gobierno fue tomado por un populista que, sin embargo, se aferró a las políticas neoliberales de sus predecesores; Colombia, el aliado más firme de Estados Unidos y plenamente comprometido con un régimen político neoliberal; y México, otro firme aliado de Estados Unidos y defensor del capitalismo de libre mercado. En 2016, estos países firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), un pacto masivo de comercio e inversión promovido por Estados Unidos pero escrito en secreto por los ideólogos de algunas de las corporaciones más grandes de Estados Unidos. Con el texto del pacto comercial revisado por más de 600 cabilderos corporativos, la Alianza para la Democracia (2016) lo describe justamente como “TLCAN con esteroides”.²

Un segundo patrón se relaciona con la formación en América del Sur de un bloque de regímenes progresistas postneoliberal orientados hacia el nuevo desarrollismo (activismo estatal inclusivo), así como hacia el extractivismo, es decir, el uso de las rentas de los recursos, recaudados o extraídos de las empresas multinacionales que recibieron concesiones para explotar y exportar los recursos naturales del país, para financiar sus programas sociales diseñados para lograr una forma de desarrollo más ‘inclusivo’ (es decir, reducción de la pobreza). Esto incluyó a los dos países más grandes del continente, Argentina y Brasil, que juntos representaban más del 70 por ciento de la economía regional y de las exportaciones y que a principios de la década de 1990 se unieron a Uruguay y Paraguay para formar un bloque comercial subregional (Mercosur) en oposición a varios esfuerzos posteriores de Estados Unidos para crear una zona de libre comercio continental. Los gobiernos de ambos países continuaron con este régimen político neodesarrollista y extractivista hasta que llegó a su abrupto fin en Argentina con la elección el 22 de noviembre de 2015 de Mauricio Macri, quien representaba las fuerzas de la oposición en la extrema derecha y el rechazo al modelo de desarrollo postneoliberal. Detrás de este acontecimiento que también se pueden rastrear en Brasil, Venezuela y Bolivia, había un cambio en la correlación de fuerzas en la lucha de clases, un ‘desarrollo’ que respondía y reflejaba el evidente fin del boom de las materias primas (alrededor de 2012) y con ello el fin de la capacidad de estos regímenes para sostener sus políticas progresistas. De hecho, a raíz de los recientes acontecimientos regionales en esta línea, los analistas habían comenzado a debatir el ‘fin del ciclo progresista’ en la política latinoamericana (Gaudichaud, 2016; Katz, 2016). Sin embargo, en 2019 pudimos ver en la región un segundo giro hacia la izquierda cuyas dinámicas siguen vigentes. Esta vez involucró a Chile y Colombia, países que no fueron afectados por la marea rosa; además Colombia siempre ha sido el principal aliado de Estados Unidos en la región y la figura clave en su política. Sobre este segundo giro a la izquierda véase a Veltmeyer (2024).

Un tercer patrón de experimentos y desarrollos políticos asociados con la transición postneoliberal y el auge de las materias primas en 2003-2012 se refirió a Venezuela, Bolivia y

² <https://www.bilaterals.org>.



Ecuador, regímenes de un matiz más radical. regímenes de tinta más radical—una marea roja—orientados en teoría (retórica política y discurso del desarrollo) si no en realidad hacia un modelo de posdesarrollo en el que, en los casos de Bolivia y Ecuador, permitiría al pueblo ‘vivir bien’; o, en el caso de Venezuela, inmersa en un proceso de transformación revolucionaria orientada hacia el ‘socialismo del siglo XXI’.

Estos regímenes se unieron a Cuba y a varios países más pequeños del Caribe para formar la *Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América* (ALBA), un régimen postneoliberal de comercio intra-regional alternativo. En el caso de Venezuela, el proceso revolucionario se remonta al régimen formado por Hugo Chávez en 1998. Al igual que los otros regímenes postneoliberal de la región, la estrategia de desarrollo del gobierno venezolano fue financiada y se basó en un enfoque extractivista, pero a diferencia de los otros regímenes postneoliberal, no depende en la inversión extranjera directa y a un acuerdo con el capital extractivo global. Sin embargo, el colapso del auge de las materias primas y la dramática caída del precio del petróleo, la única materia prima de la que dependía el régimen político, junto con las maquinaciones del imperialismo estadounidense que financiaban el sabotaje y la oposición derechista al régimen protosocialista, empujaron al país hacia el borde de una grave crisis económica. No se sabe con certeza si el efecto combinado de esta crisis, la intervención estadounidense, la oposición derechista y el sabotaje económico serían suficientes para derrocar al régimen o llevarlo a su colapso, pero no hay duda de que el proceso revolucionario en el país, al igual que el ciclo progresista en la política latinoamericana, hoy es muy cuestionable.

La elección de Macri, junto con un golpe de Estado en Brasil (la destitución de Dilma Rousseff) y el referéndum en Bolivia, así como la instauración del régimen transpacífico de libre comercio, fueron indicios de una nueva coyuntura en el proceso de desarrollo capitalista y otra oscilación del péndulo en la correlación de fuerzas de clase (Veltmeyer, 2024). Lo que está en juego en este desarrollo es lo que ha resultado ser un modelo desarrollista reaccionario en lugar de progresista, que sirvió inicialmente para desradicalizar y desmovilizar los movimientos populares y, en última instancia, para cultivar el retorno de la derecha. Con Macri el país había entrado en una nueva fase política en la que el objetivo era restaurar el modelo neoliberal de desarrollo capitalista.

Tres décadas de lucha de clases

Como se señaló en la introducción de este volumen, el proceso de desarrollo capitalista puesto en marcha por los arquitectos del sistema de Bretton Woods y los defensores de la ‘cooperación internacional’ para el desarrollo de los países ‘económicamente atrasados’ que buscaban escapar del yugo del colonialismo y la explotación imperialista—avanzó en dos etapas: una fase de desarrollo dirigido por el Estado (1948-1980) y la subsiguiente ‘era neoliberal’ en la que las fuerzas del desarrollo nacional avanzaron dentro del marco institucional y político del Consenso de Washington en cuanto a las virtudes del capitalismo de libre mercado. En cuanto a la era neoliberal, el proceso de desarrollo y los cambios correspondientes en las relaciones sociales de producción y la dinámica de una lucha de clases, se puede rastrear década por década.

La década de 1980 en América Latina fue testigo de un nuevo modelo económico, que se utilizó como modelo para ajustar las políticas macroeconómicas de los gobiernos de la región a los requerimientos del nuevo orden mundial. Debido al fracaso manifiesto y estrepitoso de

este ‘programa de ajuste estructural’ y del Consenso de Washington para lograr algún avance en el proceso de desarrollo económico, los arquitectos de la idea de desarrollo a finales de la década revisaron la agenda política neoliberal añadiendo al menú básico de reformas estructurales una ‘nueva política social’ orientada hacia el ‘desarrollo inclusivo’ (es decir, con reducción de la pobreza).

La década de 1990 fue testigo de un crecimiento espectacular de la afluencia de capital en forma de inversión extranjera directa, una profundización y extensión de la agenda de ‘reformas estructurales’ (para incluir a Argentina, Brasil y Perú, que no habían participado en el primer ciclo de ‘reformas estructurales’) y el crecimiento en el campo de poderosos movimientos sociales antineoliberales. A finales de la década, la mayoría de los países de la región habían adoptado la agenda de la ‘nueva política social’ (reducción de la pobreza, desarrollo inclusivo) del Consenso posterior a Washington y la estrategia neodesarrollista ideada por los economistas de la CEPAL adentro el marco institucional del ‘desarrollo integral’ ideado por los economistas del Banco Mundial. Sin embargo, esta agenda no influyó en el liderazgo de los movimientos sociales antineoliberales que dominaban el panorama político en muchos países. A finales de la década, a pesar de la afluencia masiva de capitales y la adopción generalizada de una agenda política reformista y asistencialista, los ideólogos y defensores de la agenda política neoliberal estaban muy a la defensiva en países como Ecuador, que cuenta con una poderosa resistencia antineoliberal. En Perú, el ciclo político se desarrolló en gran parte de América del Sur, desde Venezuela hasta Argentina y Brasil, parecía haber estado unos diez años atrasado (Petras y Veltmeyer, 2005, 2017).

Con el cambio de milenio y la tercera década de la era neoliberal, el descontento generalizado y el rechazo al neoliberalismo en toda la región dieron paso a una oleada de regímenes de izquierda con una agenda progresista basada en la búsqueda de una forma de desarrollo más inclusiva. Incluso los neoliberales de línea dura y los defensores del antiguo Consenso de Washington (y ahora Davos) habían llegado a la conclusión de que la reducción de la pobreza extrema era una parte esencial de lo que ahora se describía como una agenda política y una estrategia de ‘crecimiento económico inclusivo’ basada en la agencia del libre mercado. Esta agenda fue, y es, promovida por fundaciones privadas conservadoras y foros de política neoliberal en todo el mundo, que están fuertemente financiados por los súper ricos y la clase dominante global y sus corporaciones. Sin embargo, en las condiciones de América Latina a principios del nuevo milenio, prevaleció el Consenso post-Washington sobre la necesidad de un activismo estatal inclusivo y una mayor distribución del ingreso y la riqueza. El ciclo progresista resultante en la política latinoamericana implicó a los gobiernos de Argentina y Brasil en lo que se ha descrito como una marea rosa de cambio de régimen, y a los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador en una marea ‘roja’ (Bretton, González y Rubio, 2022; Castañeda, 2012; Svampa, 2019; Vidal Molina, 2019).

Brasil: corporativismo, lucha de clases y cleptoizquierdismo³

Dos tipos de lucha de clases han dominado las relaciones sociales brasileñas en las últimas décadas. Durante más de dos décadas de dictaduras militares (1964-1984) las clases dominantes libraron una guerra contra los obreros y campesinos, imponiendo acuerdos

³ Esta sección hace referencia a una investigación y un estudio detallado sobre la lucha de clases en Brasil realizado por Petras y Veltmeyer (2005, 2017).



tripartitos entre el Estado, los capitalistas y los dirigentes ‘sindicales’ designados. La ausencia de auténticos sindicatos de clase y las crisis económicas de principios de la década de 1980 pusieron en marcha el surgimiento de ‘un nuevo sindicalismo’. La Central Única de *los Trabajadores* (CUT), basada en la industria pesada, y el MST, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, en el campo, emergieron como fuerzas dirigentes en la lucha de clases. El deterioro del control político de los militares llevó a la oposición desde dos direcciones: (i) la burguesía agrominera y exportadora, que buscaba imponer un régimen cívico-electoral para seguir una estrategia de desarrollo económico neoliberal, y (ii) el nuevo sindicalismo de clase que buscaba democratizar y expandir la propiedad pública de los medios de producción.

La CUT clasista se alió con la burguesía liberal y derrotó a los candidatos corporativistas de la derecha respaldados por los militares. En otras palabras, la lucha de clases combinada desde abajo y desde arriba aseguró la democracia electoral y el ascenso de la burguesía neoliberal. Bajo los regímenes neoliberales de la época, se produjeron tres cambios que condicionaron aún más la lucha de clases desde abajo:

1. La CUT garantizó la legalidad y los derechos de negociación colectiva y se institucionalizó.
2. La CUT y el MST respaldaron al recién formado Partido de los Trabajadores (PT), un partido dominado por profesionales de izquierda de clase media que intentaban tomar el poder a través de procesos electorales.
3. La CUT dependía cada vez más del financiamiento del Ministerio de Trabajo, mientras que el PT recurría cada vez más a contratistas privados para financiar sus campañas electorales.

Desde mediados de los años noventa hasta la elección de Lula da Silva en 2002, la CUT y el MST alternaron la acción directa (huelgas y ocupaciones de tierras) con la política electoral, respaldando a los candidatos del PT, que buscaba cada vez más moderar las disputas de clase. La lucha de clases desde abajo se intensificó durante la destitución del presidente neoliberal Collor de Mello y su renuncia a la presidencia el 29 de diciembre de 1992 después de dos años y medio. Sin embargo, una vez derrocado Collor, la CUT moderó su lucha de clases desde abajo.

Con la hiperinflación de la década de 1990, la CUT y el MST se lanzaron a luchas de clases defensivas, abriendo el camino para la elección del neoliberal de línea dura Fernando Henrique Cardoso. Bajo su presidencia se implementó un severo ‘ajuste’ que perjudicó a los trabajadores para acabar con la inflación. Se privatizaron sectores estratégicos. Se privatizaron lucrativas empresas públicas petroleras y mineras, y se desnacionalizaron los bancos; La agroindustria ocupó un lugar central.

La lucha de clases desde abajo se intensificó, mientras que Cardoso apoyaba la lucha de clases desde arriba por el capital. Las ocupaciones de tierras lideradas por el MST se intensificaron, al igual que la violenta represión; y las huelgas obreras, y el descontento popular se multiplicó. El PT respondió incorporando la lucha de clases a su estrategia electoral. El PT también profundizó sus lazos con contratistas privados y reemplazó su programa socialdemócrata por una versión clientelar del neoliberalismo.

La creciente ola de lucha de clases desde abajo condujo a la victoria presidencial del PT, cuyo programa económico se basaba en los acuerdos con el FMI y en los vínculos con las clases

dominantes. Bajo el PT, la lucha de clases desde abajo se debilitó y se disipó. El MST y la CUT subordinaron sus luchas al PT, que promovía soluciones negociadas con la clase capitalista. La dinámica de esta forma moderada de lucha de clases excluyó los cambios estructurales y giró en torno a cambios incrementales de los salarios y el consumo y aumentos en el gasto de pobreza. El éxito electoral del PT dependía de un financiamiento cada vez mayor por parte de contratistas privados basado en la adjudicación de contratos públicos de miles de millones de reales a cambio de sobornos multimillonarios. El voto de la clase baja y de la clase trabajadora se aseguró gracias a un programa de lucha contra la pobreza bien financiado y a las campañas de captación de votos de la CUT y el MST. El alto precio de exportación de los productos primarios, basado en el floreciente mercado asiático, proporcionó un gran aumento de los ingresos estatales para financiar los préstamos de capital y el bienestar social.

La lucha de clases moderada encabezada por el PT terminó con el estallido del auge de las materias primas. Después de la segunda elección de Dilma Rousseff en 2014, la exposición de la corrupción masiva que involucraba al PT exacerbó aún más la crisis y el apoyo masivo al PT. A medida que la economía se estancaba, el PT se adaptó a las crisis adoptando los ajustes estructurales de la clase dominante. A medida que los dirigentes del PT se volcaron a la lucha de clases desde arriba, encendieron la protesta desde abajo entre la clase media, los trabajadores y los empleados, e incluso dentro del propio PT. Manifestaciones masivas protestaron por el declive de los servicios públicos.

En 2016, una lucha de clases ‘moderada’ en Brasil se bifurcó en una lucha de clases de masas desde arriba y una lucha mucho más débil ‘desde abajo’. Mientras el sistema judicial de derecha exponía la corrupción en los regímenes del PT y la economía caía en la peor recesión en 50 años, la derecha movilizó a tres millones de manifestantes callejeros que buscaban derrocar al régimen de Rousseff, cuya popularidad se desplomó a un solo dígito. La respuesta de sectores de la izquierda atrajo a menos de un millón. La lucha de clases desde arriba avanzaba y la izquierda retrocedía, como lo demostraron los acontecimientos posteriores (el éxito de las fuerzas de la derecha para derrocar finalmente a la presidenta Rousseff).

Argentina: una lucha de clases de alta intensidad⁴

Argentina en los años que precedieron a la marea rosa vivió una intensa lucha de clases que derrocó a tres presidentes en menos de dos años (2001-2002), pero la protesta masiva continuó sin líderes en un partido hegemónico. En 2003 fue elegido un peronista de centroizquierda, Néstor Kirchner, quien, bajo la presión de los movimientos de masas, impuso una moratoria de la deuda y financió una recuperación económica basada en el aumento de los precios de las materias primas y la recanalización de los pagos de la deuda.

En la década de 2003 a 2013, lo que correspondía al auge de los commodities y el ‘ciclo progresista’, una lucha de clases de baja intensidad emergió como el rasgo dominante del panorama político. Esta lucha, liderada por las clases medias, condujo a la reforma laboral y a la recuperación del capitalismo de una crisis sistémica. El régimen kirchnerista canalizó los ingresos del boom de los commodities hacia aumentos de sueldos, salarios y pensiones.

⁴ Esta sección hace referencia a una investigación y un estudio detallado sobre la lucha de clases en Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia realizado por Petras y Veltmeyer (2017).



También subsidió y atrajo a capitalistas extranjeros y nacionales de la agroindustria y la minería.

A finales de la década, la clase capitalista se sentía relativamente segura y las amenazas desde abajo se habían diluido. El alto crecimiento condujo a un aumento de la lucha de clases desde arriba. La agroindustria organizó boicots para bajar impuestos; Grupos empresariales y profesionales de Buenos Aires se reagruparon y organizaron protestas masivas. Los partidos de izquierda y los sindicatos, cooptados o fragmentados, se dedicaron a luchas economicistas. Algunas facciones dentro del Partido de los Trabajadores incluso se unieron a las manifestaciones derechistas. En 2012, el boom de las materias primas llegó a su fin en condiciones que permitieron a la derecha dura asumir el poder. El propio régimen de Kirchner-Fernández se inclinó hacia la derecha al abrazar el capitalismo extractivo como paradigma económico.

De 2013 a 2015 la derecha dominó la política electoral. Los sindicatos volvieron a estar bajo la dirección de los peronistas de derecha (Moyano, Barrionuevo, etc.). Los movimientos populares estaban en la oposición, pero sin ninguna representación política significativa. Después de una década y media, el ciclo de la lucha de clases había cerrado el círculo desde la intensa lucha de clases desde abajo, a la lucha de clases mediada por la clase media y el resurgimiento de la lucha de clases desde arriba.

Bolivia: levantamientos populares, capitalismo andino, y el socialismo comunal⁵

Entre los años 2000 y 2005 se produjeron grandes rebeliones populares en Bolivia. Entre ellas, la ‘guerra del agua’ en Cochabamba en el año 2000; un levantamiento obrero-campesino masivo en La Paz en 2003, que derrocó al presidente neoliberal Sánchez de Lozada; y un segundo levantamiento en 2005, que expulsó del poder al actual presidente Carlos Mesa y condujo a nuevas elecciones y a la victoria del líder radical campesino cocalero Evo Morales en la presidencia.

Morales y su partido MAS (Movimiento al Socialismo) asumieron el poder en 2006, poniendo fin a un período de intensa lucha de clases y levantamientos populares. En este período, el gobierno implementó una serie de reformas socioeconómicas y cambios culturales graduales, al tiempo que incorporó y cooptó al movimiento indígena y a la dirigencia sindical. El efecto neto fue la desmovilización del movimiento popular. La clave para la estabilidad, continuidad y reelección de Morales fue su capacidad para separar las reformas socioeconómicas y culturales de los cambios estructurales radicales. En el proceso, Morales se aseguró el apoyo electoral de las masas de campesinos y obreros, aisló a los sectores más radicales y se aseguró de que la lucha de clases girara en torno a cuestiones salariales a corto plazo que no pusieran en peligro la estabilidad del gobierno.

La clave de la recurrencia periódica de la lucha de clases revolucionaria en Bolivia ha sido la fusión de una multiplicidad de demandas. La lucha de clases de alta intensidad fue el resultado de los múltiples puntos de opresión socioétnica, nacional y cultural y de explotación de clase. Las demandas económicas inmediatas estaban vinculadas a las luchas de clases por cambios sistémicos a largo plazo y a gran escala.

⁵ Para detalles sobre las dinámicas de lucha de clase discutidos en esta sección ver a Petras y Veltmeyer (2005, 2017).

Los principales protagonistas de las convulsiones sociales exigieron que se pusiera fin a la discriminación etnoracial y a las indignidades profundas y generalizadas. Rechazaron el saqueo capitalista extranjero de los recursos naturales y la riqueza que no proporcionaba rendimientos positivos para las comunidades mineras y rurales. Lucharon por el autogobierno indígena y por un papel en el gobierno, si no en el gobierno. Les molestaba la negación de la presencia simbólica indígena en los espacios públicos o privados. Los salarios bajos en relación con las ganancias y los empleos peligrosos sin pagos compensatorios radicalizaron a los mineros. En este contexto, en el que a los trabajadores y a los indios se les negaba el acceso y la representación gubernamental, se basaban en la acción directa: los levantamientos populares y las demandas de revolución social eran la ruta para asegurar la justicia social.

La llegada al poder de Evo Morales abrió la puerta a un nuevo tipo de política de masas, basada esencialmente en su capacidad de fragmentar las demandas. Implementó reformas culturales y económicas y neutralizó las demandas de una revolución social. El presidente Morales convocó a una nueva asamblea constituyente que incluyó una fuerte representación de delegados indígenas. Bolivia pasó a llamarse Estado ‘plurinacional’. Se aprobó el reconocimiento formal y la aprobación de la ‘autonomía’ de las naciones indias. Con frecuencia se reunía y consultaba con los líderes indios. La representación simbólica desradicalizó a los movimientos indígenas.

El gobierno adquirió una participación mayoritaria en varias empresas mixtas con empresas de gas y petróleo y aumentó las regalías y las tasas impositivas sobre las ganancias de las empresas mineras. Morales rechazó la nacionalización total bajo control obrero. Evo Morales denunció la intervención imperialista en Bolivia y en otros lugares, y expulsó al embajador estadounidense Goldberg por planear un golpe de Estado con la oposición de extrema derecha en Santa Cruz. Expulsó a la Agencia Antidrogas y a la misión militar estadounidense por entrometerse en asuntos internos. Aumentó el gasto social y los sueldos y salarios de forma incremental cada año entre un cinco y un diez por ciento.

Estas reformas eran compatibles con contratos a largo plazo con decenas de grandes empresas mineras multinacionales extranjeras que seguían cosechando y remitiendo beneficios de dos dígitos. Aunque el gobierno pretendía ‘nacionalizar’ las empresas mineras de propiedad extranjera, en la mayoría de los casos significaba simplemente tasas impositivas más altas, comparables a las tasas de los principales países capitalistas. Las demandas revolucionarias de socializar las ‘alturas dominantes de la economía’ se desvanecieron y las energías revolucionarias de masas se desviaron hacia los convenios colectivos.

Mientras el régimen de Morales hablaba de respetar a la *Pachamama* (Madre Tierra), persiguió la explotación más descarada de las reservas de tierras de cualquier presidente hasta la fecha, abriendo ocho de los 17 parques de reservas biológicas a la explotación capitalista extractiva extranjera y nacional, argumentando que el desarrollo proporcionaría los ingresos para reducir la pobreza, ignorando a los aldeanos desarraigados en el proceso de perder el acceso al agua y la tierra.

Mientras el gobierno celebraba la cultura indígena, todas sus decisiones importantes eran tomadas por tecnócratas mestizos y descendientes de europeos. Los burócratas del MAS anularon las asambleas locales en la selección y elección de candidatos. Si bien la legislación del gobierno proponía una ‘reforma agraria’, las ‘cien familias’ de Santa Cruz seguían controlando vastas plantaciones, controlando la economía de exportación agrícola.



Continuaron recibiendo la mayoría de los créditos y subsidios del gobierno. La pobreza, especialmente la pobreza extrema, se redujo, pero sigue afectando a la mayor parte de la población de las comunidades indígenas. Las tierras públicas ofrecidas para el asentamiento indio estaban ubicadas lejos de los mercados y con pocos recursos de apoyo. Como resultado, pocas familias fueron reasentadas.

Mientras Evo Morales articulaba un discurso antiimperialista, viajaba constantemente al extranjero, a Europa, para firmar lucrativos acuerdos de inversión privada. La corrupción, argumenta Petras, se infiltró en el partido MAS e impregnó a sus funcionarios en Cochabamba, El Alto y La Paz. El efecto neto de la reforma interna y la agenda cultural inclusiva de Evo fue neutralizar y marginar las críticas radicales a su adaptación macroeconómica al capital extranjero.

Su afirmación de la cultura *indígena neutralizó* la oposición de los campesinos indígenas y de los trabajadores agrícolas a los propietarios de plantaciones que prosperaron bajo su ‘estrategia extractiva de exportación’.

La lucha de clases se centró en cuestiones económicas estrechas dirigidas por dirigentes sindicales (COB), que consultaron y negociaron acuerdos de acuerdo con los lineamientos económicos de Evo. En síntesis, bajo el presidente Morales la lucha de clases desde abajo disminuyó, las rebeliones populares desaparecieron y la negociación colectiva pasó a ocupar un lugar central. La década de Morales fue testigo de la menor intensidad de la lucha de clases en un siglo. El contraste entre la década 1995-2005 y el período 2006-2015 es sorprendente. Mientras que el período anterior bajo los gobernantes euro-bolivianos fue testigo de varias huelgas generales y levantamientos populares, durante la década posterior no hubo ninguna. Incluso la hostil y racista oligarquía terrateniente y minera de Santa Cruz finalmente llegó a acuerdos políticos y se presentó en plataformas electorales conjuntas con el MAS, reconociendo los beneficios del conservadurismo fiscal, la estabilidad social, la prosperidad capitalista y la paz de clase.

Bajo el régimen fiscal conservador de Morales, las reservas de divisas bolivianas aumentaron de menos de US\$4.000 millones a más de US\$15.000 millones, un logro que complació al Banco Mundial, pero que aún dejó a la mayoría de los campesinos por debajo de la línea de pobreza. En gran parte, el éxito de Evo en desactivar la lucha de clases y canalizar el ‘radicalismo’ por cauces seguros se debió a los cambios incrementales que fueron respaldados por un aumento de una década en los precios de las materias primas.

Con el auge de las materias primas, los precios del mineral de hierro, el petróleo, el estaño, el oro, el litio y la soja se dispararon, lo que permitió al régimen aumentar los gastos y los salarios del Estado sin afectar la riqueza y las ganancias de la élite agromineral. Pero, cuando el megaboom terminó en 2013-15 (las exportaciones cayeron un 50 por ciento en 2015) y floreció el nepotismo y la corrupción en los círculos oficiales, el MAS perdió las elecciones provinciales y municipales en las principales ciudades. El régimen del MAS, plagado de escándalos de corrupción, intentó imponer candidatos impopulares a la base de masas y perdió. La principal oposición al régimen provino de los elementos de centroderecha de la clase media. La COB y los movimientos campesinos, inactivos y completamente cooptados, continuaron respaldando a Morales, pero se enfrentaron a una base cada vez más rebelde. El declive electoral fue más evidente en la derrota de un referéndum patrocinado por el gobierno en febrero de 2016, en el que se pedía al electorado que votara a favor de la reelección de Evo,

lo que podría extender su presidencia hasta 2025. La mayoría de las grandes ciudades votaron en contra de la iniciativa del MAS, rebelándose contra la corrupción y los abusos de los funcionarios del gobierno. En cuanto al régimen político progresista de reducción de la pobreza aplicado por el régimen de Morales-Linera —un régimen progresista socavado por la insistencia del gobierno en apaciguar a los inversores extranjeros acumulando una de las mayores reservas de divisas de la región, e incluso prestando dinero de este fondo de reserva al Banco Mundial y a los inversores extranjeros a tasas de interés ridículamente bajas en lugar de invertirlo productivamente—el fin del boom de las materias primas ha frenado efectivamente este régimen (Almeyra, 2016).

Ecuador: Radicalismo de la clase media dentro la revolución ciudadana

La última década del siglo XX comenzó y terminó con un levantamiento de las comunidades indígenas que conformaron el movimiento social más poderoso en oposición a la agenda neoliberal de los gobiernos de la época. Estos movimientos jugaron un papel importante en la posterior desaparición del neoliberalismo como doctrina económica y modelo de desarrollo. Pero, a pesar de este importante desarrollo político, Ecuador ha tenido una larga historia de golpes palaciegos de escasas consecuencias socioeconómicas, al menos hasta la primera mitad de la década del siglo XXI. El preludeo de las convulsiones populares del período reciente fue una ‘década de infamia’. Los partidos oligárquicos de derecha se alternaron en el poder, saqueando miles de millones del tesoro nacional. Los banqueros extranjeros concedían préstamos de alto riesgo que se transferían a cuentas en el extranjero. Las principales compañías petroleras, entre ellas Texaco, explotaron y contaminaron grandes extensiones de tierra y agua con impunidad. Los regímenes clientes otorgaron a Estados Unidos una importante base militar en Manta, desde la cual violó la soberanía aérea y marítima ecuatoriana. Ecuador entregó su moneda y dolarizó la economía, eliminando su capacidad de elaborar una política monetaria soberana.

La lucha etnoclasista en Ecuador ha sido profundamente contradictoria. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986, encabezó grandes levantamientos en la década de 1990 y fue la fuerza impulsora del derrocamiento del oligarca Jamil Mahuad en el año 2000. Sin embargo, se alió con el coronel derechista Lucio Gutiérrez y formó una junta de tres personas que finalmente cedió a las presiones de Estados Unidos y permitió que el vicepresidente y oligarca, Gustavo Noboa, asumiera la presidencia.

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2002, la CONAIE y el sindicato liderado por los sindicatos de trabajadores petroleros y eléctricos intensificaron la lucha de clases y movilizaron a la clase obrera y a las comunidades indígenas. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 2002, el brazo político de la CONAIE (Pachakutik) y la mayoría de los sindicatos combativos respaldaron a Lucio Gutiérrez. Pero una vez elegido, Gutiérrez abrazó la agenda del Consenso de Washington, privatizando sectores estratégicos de la economía y respaldando la política de Estados Unidos hacia Venezuela, Cuba y otros gobiernos progresistas de la región. Además, Gutiérrez arrestó y destituyó a líderes militantes de los trabajadores petroleros y promovió la explotación agrominera del territorio indígena.

A pesar de la eventual desafección de la CONAIE con Pachakutik, permaneció en el gobierno hasta que Gutiérrez fue derrocado en 2005 por un movimiento compuesto en gran medida por un ‘movimiento ciudadano’ de clase media descontenta. Posteriormente, durante las elecciones de 2005, los sindicatos y la CONAIE respaldaron a Rafael Correa. Menos de dos



años después, lo denunciaron por apoyar la explotación de las regiones colindantes con las naciones indias por parte de las compañías petroleras.

La CONAIE y los sindicatos intensificaron su oposición en 2008, precisamente cuando Correa declaró ilegítima la deuda nacional y dejó de pagar la deuda ecuatoriana de 3.000 millones de dólares y redujo los pagos de bonos en un 60 por ciento. La CONAIE y Pachakutik fueron marginados por sus alianzas oportunistas con Gutiérrez. Sus ataques contra Correa, a medida que procedía a aumentar el gasto social y la inversión en infraestructura en el interior, disminuyeron aún más su fuerza. En las elecciones para una asamblea constituyente, Pachakutik recibió apenas el dos por ciento de los votos. Mientras los sindicatos y la CONAIE seguían movilizándose en apoyo de las demandas de las clases étnicas, Correa aumentó el apoyo entre las comunidades indígenas a través de programas de infraestructura financiados por el auge de las megamaterias primas, los préstamos a gran escala de China y la reducción de los pagos de la deuda.

Ante la disminución del apoyo de las clases populares, la CONAIE y sectores de los sindicatos apoyaron un intento de golpe de Estado policial respaldado por Estados Unidos el 30 de septiembre de 2010. El líder de Pachakutik, Cléver Jiménez, calificó el golpe derechista como una ‘acción justa’, mientras que decenas de miles de personas manifestaron su apoyo a Correa y a su Partido Alianza País (*Alianza PAIS*).

La ‘Revolución Ciudadana’ de Correa se basa esencialmente en la profundización de un modelo capitalista desarrollista arraigado en la minería, el petróleo y la energía hidroeléctrica. Durante la última década de gobierno de Correa, el gobierno ha abrazado a las grandes petroleras y ha buscado préstamos del Banco Mundial para financiar el modelo de crecimiento agro-minero, al tiempo que ha reprimido duramente al movimiento indígena (CONAIE) y a los movimientos sociales urbanos disidentes. Esta represión tiene sus raíces en la adopción por parte del gobierno de un modelo extractivista de desarrollo capitalista y su dependencia de la inversión extranjera directa, una aceptación —y dependencia— que ha llevado al gobierno a ponerse del lado de las corporaciones multinacionales del sector extractivo en su conflicto con las comunidades en la frontera extractiva.

Durante el auge de las materias primas de 2006 a 2012, Correa amplió las prestaciones de salud, educación y bienestar, al tiempo que limitaba el poder de la élite costera de Guayaquil. Con el fin del boom y la consiguiente caída de los precios, Correa intentó debilitar la oposición de izquierda y sindical mediante la aprobación de leyes laborales restrictivas y la extensión de la exploración petrolera a las tierras altas, donde se concentran las comunidades indígenas.

En noviembre de 2013, los sindicatos, especialmente los del sector público, formaron un ‘Frente Unido de Trabajadores’ para protestar contra la legislación de Correa diseñada para restringir la organización de sindicatos independientes del sector público.

En las elecciones municipales de 2014, los partidos oligárquicos de derecha derrotaron a Correa en las principales ciudades, incluidas Guayaquil, Quito y Cuenca. Una vez más, la CONAIE y los sindicatos centraron su ataque contra Correa e ignoraron que los beneficiarios de su declive fueron la extrema derecha neoliberal.

En junio de 2015, la extrema derecha, liderada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el millonario banquero Guillermo Lasso, encabezó una serie de protestas masivas por un impuesto progresivo a la herencia. Buscaban derrocar a Correa a través de un golpe de Estado.

Los partidarios de Pachakutik participaron en las protestas. La CONAIE atacó a Correa y llamó a un levantamiento en lugar de respaldar su impuesto progresivo a la herencia.

En otras palabras, la coalición antiextractivista indígena-obrera, el Frente Unido de los Trabajadores y la CONAIE, favoreció la destitución de Correa y rechazó muchas de sus políticas, pero facilitó el ascenso al poder de la derecha oligárquica tradicional.

La lucha de clases en América Latina, como en otras partes, a lo largo de los años se ha desarrollado en ciclos que reflejan cambios en la correlación de fuerzas en diferentes coyunturas del proceso de desarrollo capitalista, fuerzas que pueden movilizarse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la fuerza relativa de estas fuerzas.

Podemos identificar cuatro grandes ciclos en esta lucha a lo largo de las últimas seis décadas de desarrollo capitalista: tres décadas bajo la agencia del Estado (desarrollo dirigido por el Estado) seguidas de tres décadas bajo el dominio del modelo neoliberal del capitalismo de libre mercado. En las dos primeras décadas de este proceso de desarrollo, la lucha de clases tomó la forma de una lucha de los trabajadores organizados por salarios más altos (una parte justa de los frutos del trabajo de los trabajadores) y mejores condiciones de trabajo, y una lucha de los campesinos proletarizados por la tierra y para reclamar su derecho a buscar su sustento rural basado en la agricultura. A lo largo de estas décadas, tanto el movimiento obrero como la lucha por la tierra tuvieron cierto éxito en lograr una mejora decidida, aunque sólo relativa, de la condición social de sus miembros. Sin embargo, a finales de la década de 1970 ambos movimientos habían sido derrotados o hundidos, su capacidad de organización y sus fuerzas de resistencia desarticuladas. En estas condiciones, con la izquierda política en desorden y la derecha política a la ofensiva y en pleno control del aparato estatal, el movimiento por el cambio revolucionario dio paso a una contrarrevolución neoconservadora que detuvo y en cierta medida revirtió los logros alcanzados por el campesinado y la clase obrera en las décadas anteriores.

Con este cambio en la correlación de fuerzas en la lucha de clases, la década de 1980 en América Latina, en la periferia del sistema capitalista mundial, vio el avance sostenido del capital tanto en la agricultura como en la industria, lo que resultó en la destrucción de las fuerzas productivas en ambos sectores reflejada en lo que se ha analizado como ‘una década perdida para el desarrollo’ (sin crecimiento económico, un deterioro de la condición social de la gente en el sector popular) y una lenta pero constante reorganización de la resistencia en el campo. Para facilitar el avance de capitales, se impuso a los gobiernos de la región un programa de reformas estructurales en la política macroeconómica y se estableció un nuevo orden mundial en lo que respecta a las relaciones internacionales de comercio y el flujo de capitales.

En la década de 1990, el capital en forma de corporaciones multinacionales e inversión extranjera directa se trasladó a la región a lo grande, multiplicándose por seis en volumen entre 1990 y 1997, después de haber comprado a precios de ganga muchos de los activos de las lucrativas empresas estatales y bancos colocados en subasta. En estas condiciones, y en el marco del Consenso de Washington sobre las virtudes del capitalismo de libre mercado, la década de 1990 ha sido calificada como la ‘edad de oro del imperialismo estadounidense’, en referencia a que facilitó una invasión de capitales que, según un relato, resultó en una salida neta de 100 mil millones de dólares en el transcurso de la década (Saxe- Fernández y Núñez, 2001). El nuevo milenio, sin embargo, verá otro cambio importante en la correlación de las diversas fuerzas en la lucha de clases: un cambio radical en la política de esta lucha. Las



condiciones de este cambio incluían (i) una resistencia organizada efectiva contra la agenda política neoliberal montada por nuevos movimientos sociopolíticos arraigados en el campesinado y los trabajadores rurales sin tierra, y en algunos contextos en las comunidades indígenas; (ii) las condiciones de una crisis económica y política que llegó a su punto álgido en Argentina en 2001; (iii) el consiguiente desencanto y rechazo generalizado en toda la región al neoliberalismo como modelo económico; y, a otro nivel, iv) una serie de cambios en la economía mundial, entre ellos el ascenso de China como potencia económica y la demanda de recursos naturales para impulsar el rápido crecimiento de la economía china.

En estas condiciones, el nuevo milenio se abrió con la formación de una serie de regímenes de izquierda que respondieron al desafío que los movimientos sociales campesinos e indígenas plantearon a los regímenes neoliberales existentes y las fuerzas políticas que los apoyaron. Aprovechando la apertura política brindada por los movimientos sociales, y en respuesta a la creciente demanda en algunos círculos de una forma de desarrollo más inclusiva, se establecieron regímenes postneoliberal de centroizquierda con una agenda política progresista en Venezuela (1998), en Argentina y Brasil (2003), y luego en Bolivia (2006) y Ecuador (2007). Los hitos en la dinámica del cambio de régimen de la marea marina, y las utopías y distopías resultantes, incluyen: (i) una rebelión popular en Venezuela en 1998 que llevó a Hugo Chávez al poder y con él a la Revolución Bolivariana; (ii) un levantamiento, en 1990 y luego nuevamente en 2000, de las nacionalidades y comunidades indígenas de Ecuador organizadas en la forma de la CONAIE; puso a la defensiva la agenda política neoliberal no solo en Ecuador sino en todo el mundo. región, creando las condiciones que llevarían al poder a Rafael Correa y su régimen ‘progresista’ y su revolución ‘ciudadana’; (iii) en Bolivia, un período de efervescencia revolucionaria (2000-2005) marcado por las guerras del gas y el agua, el ascenso de Evo Morales al poder, la creación del Movimiento al Socialismo (MAS) como instrumento de soberanía del pueblo y la formación en 2006 de un nuevo régimen político multiétnico y plurinacional respaldado por los movimientos sociales y orientado hacia el ‘socialismo’ y un modelo posdesarrollo de ‘vivir bien’ en solidaridad y armonía; (iv) en Argentina, la transmutación de una crisis económica —con su punto más bajo en 2001— en una crisis política, dando lugar a un movimiento histórico de trabajadores desocupados (*los piqueteros*) y en 2003 a un régimen ‘progresista’ encabezado por los Kirchner; (v) la emergencia de ‘iniciativas locales de organización para la toma y el ejercicio del poder popular’, ‘virulentas protestas callejeras de rechazo a las decisiones tomadas por el poder nacional y transnacional’ y la resistencia generalizada aunque en formas ‘subterráneas’ y arenas localizadas (Gaudichaud, 2016; Zibechi, 2012); (vi) un cambio en la suerte y la capacidad del Estado imperial estadounidense para dictar o influir en la política, marcado por el surgimiento de regímenes antiimperialistas en Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, así como en Venezuela; y (vii) el rechazo, en 2005, de la propuesta de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

A pesar de que Estados Unidos perdió el acceso a algunas bases militares en Ecuador y Bolivia, se ha reagrupado y reconfigurado sus alianzas militares en la región, ampliando sus bases en Perú y Paraguay, así como en Honduras, y ha tenido éxito en el proyecto de reajustar un régimen de libre comercio en la forma de la Alianza Transpacífica de Libre Comercio. la capacidad de Estados Unidos para ejercer su poder imperial —tanto el poder duro de la fuerza militar como el poder blando de la asistencia para el desarrollo y la cooptación— ha disminuido drásticamente en la región. En este contexto de disminución del poder imperial, Estados Unidos continúa con su política de apoyo a varios intentos de golpe de Estado (en Honduras y Venezuela) y a los esfuerzos de desestabilización económica de la derecha

(Venezuela), y el apoyo estratégico al capital estadounidense en sus operaciones en América Latina, ha tenido que depender cada vez más de la economía de goteo en forma de nuevo desarrollismo asistencialista, es decir, apoyo tácito al nuevo modelo económico de activismo estatal inclusivo.

La transición de una lucha de clases intensa a la limitada, 2000-2014

La intensidad y el alcance de la lucha de clases variaron en los países con un régimen postneoliberal. Durante el inicio del ciclo progresista de los regímenes de centroizquierda y el inicio del boom de las materias primas, la lucha de clases fue intensa y estuvo vinculada a importantes avances sociales. Posteriormente, entre 2006 y 2010, se garantizó a los capitalistas protección contra la expropiación, se les concedieron subsidios, incentivos a la exportación y desgravaciones fiscales. Los trabajadores recibieron empleos, aumentos salariales y de pensiones y acceso a crédito barato para financiar las compras de los consumidores.

Al comienzo de la segunda década, con el fin del boom de las materias primas, la desaceleración de la dinámica del crecimiento económico en la economía mundial, las persistentes crisis económicas y el crecimiento masivo de la deuda de los consumidores, y el fin de los flujos de capital extranjero a gran escala, la lucha de clases desde arriba recobró fuerza. La clase capitalista presionó por mayores apoyos e incentivos; Las huelgas laborales se multiplicaron especialmente ante el aumento de los precios y el rezago salarial.

En el período más reciente de cambio de régimen (2013-2015), la lucha de clases desde arriba ha resurgido como un determinante influyente de la política de régimen. En Argentina, el régimen de Kirchner II (Cristina Fernández) firmó lucrativos acuerdos con las principales empresas agromineras, devaluó efectivamente el peso para favorecer a los exportadores de agronegocios y se volcó hacia un mayor apoyo a los tenedores de deuda externa. El giro a la derecha del régimen, su abrazo a los sectores capitalistas dirigentes ha provocado una huelga general de una de las centrales sindicales (encabezada por Moyano) y ‘bloqueos de carreteras’ por parte de activistas sindicales disidentes de izquierda. El régimen kirchnerista ha cerrado el círculo: de acomodar las demandas de los trabajadores desempleados de inversión pública y aumentos salariales en 2003-2006 a promover pactos sociales tripartitos entre el trabajo y el capital en 2007-11 a un giro a la derecha cuando el fin del auge de las materias primas redujo la ganancia inesperada de ingresos fiscales adicionales, y la clase capitalista volvió a la ofensiva.

En Bolivia, el régimen del MAS llegó al poder mediante movilizaciones masivas desde abajo y adoptó (al menos retóricamente) una agenda plurinacional y nacionalista. Pero al inicio del segundo mandato de Evo Morales (2008) siguió e implementó una política de puertas abiertas frente al capital extractivo agrominero extranjero. Las mejoras incrementales en los salarios y las pensiones y la amplia cooptación de los líderes campesinos y sindicales crearon una estructura estatal cuasi corporativa embellecida por la retórica populista. La lucha de clases desde abajo fue aprovechada por el MAS para repeler diferentes intentos de golpe de Estado de la élite cruceña en 2008-09. Posteriormente, el MAS se movió para reconciliar a la élite a través de un pacto político-económico basado en el acomodo mutuo del régimen y el capital.

Desde finales de 2010 hasta 2014, el régimen del MAS adoptó una estrategia desarrollista basada en la alianza con el capital extractivo, la política fiscal ortodoxa y la acumulación de reservas de divisas gestionadas por banqueros extranjeros.



Paradójicamente, la lucha de clases desde abajo ha conducido en la última década a regímenes que responden favorablemente a las demandas de la clase capitalista extranjera y nacional. Las experiencias argentinas y bolivianas de la lucha de clases siguen una trayectoria en la que la lucha de clases desde abajo gana influencia sobre los regímenes de centroizquierda durante varios años, pero luego da paso a la acomodación de clases y la desmovilización. A esto le sigue el resurgimiento de la lucha de clases desde arriba y la conversión de los regímenes de centroizquierda en mecenas y promotores de los intereses capitalistas a través de políticas desarrollistas.

Incluso en Venezuela, donde el gobierno chavista de Maduro ha intentado mantener el rumbo de la Revolución Bolivariana de orientación socialista bajo enormes presiones internas y externas, el gobierno ha recurrido hacia un pacto de producción con el capital bajo la presión de una violenta ofensiva de clase capitalista lanzada en febrero de 2014. Las masas venezolanas en forma de una lucha de clases desde abajo han respondido a una poderosa ofensiva capitalista, pero dependen en gran medida del gobierno de Maduro, que ha intentado dividir a la oposición, reprimir a los sectores violentos y ofrecer concesiones a los capitalistas productivos y a las fuerzas de oposición.

¿El fin del ciclo progresivo?

Las alianzas étnicas de clase en Bolivia y Ecuador han tenido resultados divergentes. En el primero llevaron al poder al gobierno de centroizquierda encabezado por Evo Morales. En esta última condujeron a alianzas oportunistas, derrotas políticas y caos ideológico. La lucha de clases desde abajo ha conducido a una variedad de resultados políticos, algunos más progresistas que otros. Pero, a pesar de las afirmaciones de algunos presidentes elegidos popularmente como Evo Morales, ninguno resultó en un régimen obrero-campesino-indígena.

La lucha de clases en las últimas dos décadas tomó un patrón cíclico, aumentando en oposición a los regímenes neoliberales de derecha (De la Rúa en Argentina, Cardoso en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia, Mahuad en Ecuador), pero luego menguando con la llegada al poder de un nuevo ciclo de regímenes de centroizquierda. La excepción fue Ecuador, donde los principales protagonistas de la lucha de clases respaldaron al régimen derechista de Lucio Gutiérrez antes de caer en el caos.

La clave del éxito de los regímenes de centroizquierda fue el auge de los precios de las materias primas durante una década, que les permitió amortiguar la lucha de clases mediante reformas asistencialistas de la asistencia social fragmentarias, así como un aumento de los sueldos y salarios. Sin embargo, las reformas graduales debilitaron los impulsos revolucionarios desde abajo. La descompresión de la lucha de clases y la canalización de la lucha por cauces institucionales condujeron a la cooptación de sectores de la dirección popular, y a la separación de las reivindicaciones económicas de las luchas por el poder político popular.

Desde una perspectiva histórica, la lucha de clases logró durante un tiempo reducir significativamente el desempleo y la pobreza, aumentar el gasto social y asegurar el reconocimiento legal. Al mismo tiempo, los líderes de los movimientos clasistas se atuvieron al modelo capitalista extractivo y su impacto devastador en el medio ambiente, la economía y las comunidades de los pueblos indígenas. Sectores minoritarios de los movimientos populares en Brasil lucharon contra la devastación de la selva amazónica por parte del régimen

del Partido de los Trabajadores y el desplazamiento de las comunidades indígenas. En Bolivia, el presidente Evo Morales habló en foros internacionales en defensa de *la pachamama* y en Bolivia abrió la reserva nacional del TIPNIS a la explotación petrolera y minera, ¡cometiéndolo matricidio! Del mismo modo, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández se enfrentó a una oposición sindical limitada cuando firmó un importante acuerdo con Monsanto, para profundizar aún más la producción de granos genéticamente alterados y un importante acuerdo petrolero con Chevron-Exxon para explotar la explotación de petróleo y gas mediante fracking en el *complejo de Vaca Muerta*. En Ecuador, el acuerdo CONAIE-Gutiérrez y el posterior apoyo a Correa condujeron a una profundización de la degradación ecológica y a una disminución de la oposición al capitalismo extractivo de Correa.

El mayor golpe al modelo capitalista extractivo no vino de la lucha de clases sino del mercado mundial. La caída de los precios de las materias primas condujo a una reducción a gran escala del flujo de capital extractivo extranjero. Sin embargo, la caída de los precios de las materias primas debilitó a la centroizquierda y provocó un resurgimiento de la lucha de clases desde arriba. En Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil, las clases altas organizaron protestas callejeras a gran escala y salieron victoriosas en las elecciones municipales y estatales. En contraste, las organizaciones clasistas siguen ligadas a luchas económicas defensivas por los salarios y los recortes sociales de sus antiguos aliados de centroizquierda.

En esta situación podemos observar el ascenso de la lucha de clases desde arriba bajo condiciones que incluyeron la desaparición de varios regímenes de centroizquierda, las crisis económicas de un modelo de desarrollo capitalista extractivo basado en la mercancía, y la cooptación y/o desmovilización de las organizaciones de lucha de clases.

En Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, la lucha de clases desde arriba y la derecha apuntaba al poder político: expulsar a la centroizquierda y reimponer las políticas neoliberales de libre comercio. Buscaban revertir el gasto social y la fiscalidad progresiva, dismantlar la integración regional y restablecer la legislación represiva. La elección en Argentina fue la señal más clara de este cambio en la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Durante el siguiente quinquenio 2015-2019, vimos el regreso de la derecha neoliberal dura en la presidencia de Macri, la ruptura de la cooperación tripartita (trabajo, capital, gobierno) y el retorno del gobierno bipartito capital-Estado.

Liberados de las negociaciones fáciles que implicaban ganancias incrementales constantes, los movimientos populares combinaron la lucha por las ganancias a corto plazo con las demandas de cambios estructurales a largo plazo. Es probable que la conciencia de clase revolucionaria resurja en algunos casos.

El retorno de la derecha dio lugar a medidas socioeconómicas regresivas en todos los ámbitos, intensificando como resultado la lucha de clases. Por ejemplo, casi inmediatamente después de asumir el poder, el nuevo gobierno de Macri se embarcó en una rápida serie de reformas económicas conservadoras, amenazando el empleo del sector público y los programas sociales. En marzo de 2016, con Macri apenas tres meses en el cargo, 200.000 trabajadores estatales habían sido despedidos y 54.000 trabajadores fueron despedidos solo en la industria de la construcción. Se puede esperar que estas y otras medidas políticas similares no sólo provoquen una revuelta de la clase trabajadora, sino que reúnan a sectores dispares de la población trabajadora urbana y rural. El escenario estaba listo para poner en marcha la dinámica de otra lucha de clases revolucionaria.



El fin de la era neoliberal fue señalado por el ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela y el surgimiento de regímenes postneoliberal en América del Sur. La expresión más clara de este ‘reflujo en la década postneoliberal’ —para usar la expresión de Gaudichaud— fue el ascenso de Macri a la presidencia en las elecciones de 2015, que no solo condujo a un régimen ideológicamente comprometido con el retorno de la agenda política neoliberal y las relaciones amistosas con Estados Unidos. Pero según algunos expertos latinoamericanos (véase, por ejemplo, James Petras), reflejó un claro cambio en la correlación de fuerzas en el contexto regional de la lucha de clases.

¿Un segundo giro a la izquierda?

La victoria del neoliberal de ultra-derecho Macri en Argentina, y el golpe de derecha en Brasil, no marcaron el inicio, como muchos habían predicho, de un nuevo ciclo conservador de populismo autoritario en la política latinoamericana. Por un lado, el equipo económico de Macri pronto se enfrentó a una oposición masiva y carecía de apoyo político fuera de los barrios de clase alta. Sus políticas polarizaron al país y socavaron la estabilidad que buscan los inversionistas. Las devaluaciones brutales y el fin de los controles de capital fueron una receta para incitar a las huelgas generales. Los conflictos, el estancamiento y la hiperinflación acabaron con el entusiasmo de los inversores locales y extranjeros. Además, Macri podía abrazar a Washington porque el socio comercial natural de Argentina era China. El régimen de Macri fue el principio y el fin de una reversión al desastre neoliberal, similar a la ocurrida a fines de la década de 1990.

Según unos analistas, con el tiempo la crisis de la ‘nueva derecha’ podría estimular la formación de una nueva izquierda auténtica, libre de corrupción y de vínculos con las grandes empresas. En estas condiciones puede surgir un auténtico partido obrero que lleve adelante políticas socioeconómicas que pongan fin a la explotación del trabajo y al saqueo de los recursos naturales del país. Es decir, una izquierda que de palabra y de obra defienda el medio ambiente y respete la naturaleza y los derechos de los afrobrasileños, los indígenas y las mujeres.

En cuanto la política electoral resulta que después de un intervalo dominado por regímenes de la ultraderecha (2015-2022)—es decir, regímenes autoritarios de carácter populista (Jain Bolsonaro, presidente de Brasil en los años 2019-2022, el caso extremo)—el péndulo electoral en 2019 gira otra vez hacia la izquierda con la formación de regímenes de carácter progresista. Primero, en 2019 vimos a la ascensión al poder en México de Andrés Manuel López Obrador, un político de centroizquierda de formación populista. En Chile en 2022 el péndulo electoral llevó la presidencia Gabriel Boric, un joven político marxista quien transitó del activismo en el movimiento estudiantil al liderazgo de una coalición de centroizquierda. En Colombia, hasta entonces el aliado principal de los EE.UU, las elecciones presidenciales de 2022 llevaron al poder Gustavo Petro, un político de la izquierda de formación como guerrillero (con el M19) pero quien se presenta como pragmático, capaz y dispuesto de formar un *Pacto Histórico* con legisladores de la oposición.⁶

⁶ Desde que ganó las elecciones, Petro también ha tratado de calmar los temores de que gobernaría como un radical. Primero, nombró como su ministro de Hacienda a José Antonio Ocampo, un reconocido economista conocido por ser un defensor de una fiscalidad más progresiva. Actualmente, solo el cinco por ciento de los colombianos paga impuesto sobre la renta personal, y Petro planea aumentar los impuestos a los ricos. Sin embargo, es poco probable que algunas de las propuestas de Petro, como

Es posible discernir y podemos establecer unos factores comunes en esta segunda marea rosada, y condiciones impuestas sobre los políticos de la izquierda. Todos estos políticos de izquierda llegaron a poder en frente de una alianza amplia entre fuerzas de izquierda y céntrico. Por ejemplo, por ejemplo, Gustavo Petro, recientemente electo presidente de Colombia, tenía años de experiencia con el M19, un movimiento guerrillero urbano que estuvo activo a finales de la década de 1970 y en la década de 1980, así como el partido político de izquierda Alternativa Democrática, antes de presentarse a las elecciones presidenciales al frente de la *Pacto Histórico*, en el que se proyectó como un pragmático capaz de llegar a través del pasillo legislativo; López Obrador abandonó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) antes de formar una coalición de centroizquierda para contender las elecciones presidenciales; Veronika Mendoza, un político socialdemócrata peruano situado en algún lugar entre la izquierda y la centroizquierda, dejó atrás la *Frente Amplio*, una coalición política de partidos, organizaciones políticas, movimientos sociales y ciudadanos activistas cuyo objetivo es unificar y a los diferentes sectores (progresista, socialista y comunista) de la izquierda peruana; y Boric, el presidente izquierdista de Chile dejó atrás la política universitaria de izquierda para dar el salto a la política nacional.

Otro factor común en este segundo giro a la izquierda en la política latinoamericana fue el descontento generalizado que reflejaba el deterioro de las condiciones socioeconómicas. Por ejemplo A pesar de su relativa estabilidad económica y política en las últimas décadas, Colombia sigue siendo uno de los países más problemáticos de América Latina. El descontento alcanzó un máximo histórico justo antes de las elecciones que llevaron a Petro al poder, lo que llevó a repetidas oleadas de protestas entre 2019 y 2021, culminando en una explosiva rebelión social el 28 de abril de 2021. Entre los factores que impulsaron este descontento generalizado se encuentran los siguientes: peor desempeño económico en cincuenta años (con una caída del 6,8 por ciento en el PIB) y una tasa de desempleo de 14 por ciento, Nivel socioeconómico paralizante desigualdad, la falta de servicios públicos, problemas relacionados con el estado de derecho de la delincuencia organizada, lo que ha provocado el desplazamiento interno forzado de casi 80.000 colombianos en 2021, y los altos niveles de deforestación en la Amazonía. Sumado a estas condiciones, el detonante probable de la rebelión de 2021 y de una huelga laboral nacional fue una propuesta de aumento de impuestos. Otra señal de descontento fue el nivel récord de colombianos que llegan a la frontera con Estados Unidos.⁷

La mayoría de las élites políticas, económicas y militares tradicionales del país estaban lo suficientemente preocupadas por el ascenso de Petro como para que en la segunda vuelta de junio apoyaran a Rodolfo Hernández, un magnate inmobiliario y novato político cuyas opiniones sobre muchos temas políticos importantes seguían siendo desconocidas. Muchos de los enemigos de Petro todavía asocian a la izquierda con los movimientos guerrilleros del país, como las ahora disueltas *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC) y expresaron

ofrecer a cada persona desempleada un trabajo en el sector público, sean factibles y pueden asustar a los inversores. Petro eligió al veterano político conservador Álvaro Leyva como ministro de Relaciones Exteriores y a Alejandro Gaviria, quien trabajó para gobiernos de centroderecha, para dirigir el Ministerio de Educación, otra señal de que Petro busca proyectarse como un pragmático capaz de llegar al otro lado del pasillo.

⁷ Además de las reformas tributarias y de salud, las demandas de los organizadores de la huelga incluían un ingreso básico universal al nivel del salario mínimo nacional, apoyo adicional para las pequeñas empresas y la prohibición del uso de herbicidas a base de glifosato.



su temor de que Petro se convirtiera en un populista, si no en un protosocialista, como López Obrador de México, o peor aún, otro Nicolás Maduro.

Conclusión

El progresismo ha tenido un impacto decididamente positivo en la condición social de la población, al reducir significativamente la incidencia de la pobreza, la que reduce radicalmente la calidad de vida, la salud y las oportunidades económicas de un individuo. El Banco Mundial describe su misión como el alivio y la reducción de la tasa de pobreza mundial. Esta fue su misión declarada a partir de 1973, cuando declaró oficialmente su guerra contra la pobreza mundial. Sin embargo, no fue sino hasta el advenimiento del ciclo progresista que se logró una mejora sustancial en este frente, y esto se debió a que el Banco Mundial era un defensor y estaba casado con la agenda de políticas neoliberales, que, incluso los economistas del PNUD en su informe de 2010 sobre el desarrollo humano en América Latina y el Caribe (PNUD, 2010: xv) argumentó que ‘existe una correlación directa entre las desigualdades sociales estructuradas y las políticas responsables o que provocan estas desigualdades, y la pobreza’. En palabras de este informe, En palabras del Informe, ‘existe una correspondencia directa entre el avance de la globalización, el neoliberalismo, y el avance de la pobreza, la desigualdad social, la inequidad social’. El informe añade que ‘las contradicciones más explosivas... se dan porque el avance de la globalización marcha de la mano con el avance de la pobreza y la polarización social. Es innegable’, dice el informe, ‘que los decenios de 1980 y 1990 [fueron] la creación de una brecha abismal entre la riqueza y la pobreza’ y que ‘esta brecha constituye el obstáculo más formidable para lograr el desarrollo humano’.

Por lo tanto, fue que el rechazo de la agenda política neoliberal del capitalismo de libre mercado, y una forma de desarrollo más inclusiva basada en una agenda política postneoliberal, hizo que se lograra una mejora fundamental en el campo de la pobreza. Así, después de tres décadas de neoliberalismo, fueron los gobiernos progresivos formados en la marea rosa, capaces de enfrentar la problemática de la pobreza al reducir la tasa de pobreza en un promedio del 40 por ciento en el transcurso del ciclo progresivo.⁸

Resulta que el enfoque de nuevo desarrollismo construido por los economistas de CEPAL y adoptado por los gobiernos progresistas de la Marea Rosa, permitieron esos gobiernos abordar con relativo éxito la contradicción fundamental del capitalismo, lo que el PNUD había descrito como el ‘predicamento de la desigualdad’. Sin embargo, con su enfoque y estrategia nuevo desarrollismo, estos mismos gobiernos abrieron una la caja de pandora en forma de la segunda y tercera contradicción del capitalismo, a saber, el intercambio desigual entre los países del centro del sistema mundial y los de la periferia—un rasgo fundamental del extractivismo—y la contradicción sociedad-ecología del desarrollo capitalista, que, al anteponer las ganancias a las personas y al medio ambiente, activó la propensión del sistema a la crisis, un problema que en el contexto actual ha asumido proporciones globales. Así, podemos concluir que la propensión a la crisis es la cara negativa del modelo de nuevo

⁸ En Ecuador, un caso típico de regímenes progresistas formados en el mar rosa, la tasa de pobreza se redujo en un 50 por ciento durante la administración de Rafael Correa, de 2003 a 2013 (PNUD, 2014).

desarrollismo, y esto por la dependencia en la IED y el neoextractivismo, es decir, el uso de los ingresos fiscales derivados de las exportaciones de productos básicos para financiar el programa de desarrollo social del gobierno y su política de la reducción de la pobreza (Svampa, 2019). En consideración de los impactos negativos y los altos costos sociales y ecológicas de capitalismo en forma extractivista concluimos que Machado y Zibechi (2016). Tienen toda la razón en hacer hincapié en las dificultades de cambiar el mundo desde arriba y los límites al respeto del progresismo.

Referencias

- Bretton, V., M. González and B. Rubio (2022), “Peasant and indigenous autonomy before and after the pink tide in Latin America,” *Journal of Agrarian Change*, Special Issue. DOI: 10.1111/joac.12483.
- Castañeda, J.G. (2012), “Latin America’s Left Turn,” *Foreign Affairs*, 85(3): 28–43.
- Gaudichaud, F. (2016), “¿Fin de ciclo? Los movimientos populares, la crisis de los ‘progresismos’ gubernamentales y las alternativas,” *Dossier: América Latina: crisis de los ‘gobiernos progresistas’ y alternativas actuales*, *Revista Herramienta*, 58. www.herramienta.com.ar/node/2540.
- Katz, C. (2016), “Is South America’s ‘progressive cycle’ at an end?” *The Bullet*, 1229, 13 March. www.socialistproject.ca/bullet/1229.php [accessed 24 June 2016].
- Katz, C. (2023), “El desconcierto del neoliberalismo latinoamericano – sumario,” *Resumen Latinoamericano*, 1 de abril.
- Machado, D. y R. Zibechi, R. (2016). *Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo*. La Paz: CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario).
- Petras, J. Veltmeyer, H. (2005). *Social Movements and State Power: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador*. London: Pluto Press.
- Petras, J. y Veltmeyer, H. (2017). *Class Struggle in Latin America: Making History Today*. Londres: Routledge.
- PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). *Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe*. Nueva York: PNUD. Nueva York.
- PNUD (2014). *Informe sobre Desarrollo Humano 2014*. Nueva York: UNDP.
- Saxe-Fernández, J. y Núñez, O. (2001), “Globalización e Imperialismo: La Transferencia De Excedentes De América Latina,” en Saxe-Fernández et al. *Globalización, Imperialismo y Clase Social*. Buenos Aires/México: Editorial Lumen.
- Svampa, M. (2017). *Del cambio de época al fin de ciclo: gobiernos progresistas, extractivismo, y movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires: Edhasa.
- Veltmeyer, H. (2012), “The Natural Resource Dynamics of Post-Neoliberalism in Latin America: New Developmentalism or Extractivist Imperialism?” *Studies in Political Economy*, Vol. 90, Autumn, pp.57-86
- Veltmeyer, H. (2023), “The New Geoeconomics and Geopolitics of Extractive Capital in Latin America,” Capítulo 2 de Veltmeyer, H. y A. Ezquerro-Cañete, A. (coords) *From Extractivism to Sustainability: Scenarios and Lessons from Latin America*. Londres: Routledge.
- Vidal Molina, P., (coord.) (2019). *Neodesarrollismo y socialismo bolivariano modelos de desarrollo y políticas públicas en américa latina*. Buenos Aires: CLACSO.

